

## Control constitucional del modelo de comunicación política (el nuevo PES y JIN)<sup>1</sup>

La reforma a la Constitución en materia electoral del 10 de febrero de 2014 estipuló un control constitucional –vía jurisdiccional- del modelo de comunicación política establecido en la reforma a la Carta Magna del año 2007. De modo que, el artículo 41 de la Carta Magna se fortaleció con la implementación de un modelo dual de solución de procedimientos especial sancionadores (PES) y, además, se establecieron, por primera vez, causales de nulidad de una elección en el texto de la Constitución.

Al realizar una reconfiguración del PES se retomó la necesidad de que fuera una autoridad jurisdiccional la encargada de poner fin a dichas controversias, dejando en las manos de la autoridad administrativa electoral la etapa de investigación, para que fuera una Sala, de reciente creación, la que resolviera las denuncias. Dicha determinación puede ser recurrida, vía recurso de revisión, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, el proceso electoral federal y los 17 procesos locales dieron muestra de que este procedimiento aún tiene cuestiones por mejorar. Uno de ellos es la contradicción de criterios que existen entre las “4” autoridades que pueden conocer de una denuncia. Es decir, aunque el modelo fue planteado para que sólo resolviera la nueva Sala Regional Especializada, se presentan resoluciones de 4 autoridades diferentes: a) Comisión de Quejas y Denuncias en la adopción de medidas cautelares, b) Sala Regional Especializada en el fondo del asunto, c) Sala Superior ante la revisión de la sentencia de la Sala Especializada y, aun en casos especiales, d) Consejo General del INE, ante el incumplimiento de la sentencias de algunos actores políticos (PVEM), la Sala Superior ordenó que se abrieran procedimientos ordinarios<sup>2</sup> para que se atendiera este desacato.<sup>3</sup> ¿Qué criterio se debe tomar? ¿Cómo mejorarlo?

El otro cambio significativo se presentó en la adopción de causales de nulidad en el propio texto constitucional. Estableció que se podía presentar la nulidad de una elección por rebase de topes de gastos de campañas mayor al 5%, compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión y se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. En materia de modelo de comunicación política es importante que se haya regulado la compra o adquisición de cobertura informativa, puesto que si bien era algo prohibido por la Constitución en 2007 se continuo perpetrando tiempo después,<sup>4</sup> incluso se llegó a decretar la nulidad de una elección por imparcialidad en la contienda electoral por la adquisición de tiempo de manera ilegal (Morelia).

Esta reforma y el control constitucional al modelo de comunicación suponen la hipótesis de una posible vinculación entre ambos, puesto que en sendas ocasiones el tribunal ya ha determinado que en pleno proceso electoral algunos actores políticos, candidatos y partidos políticos han adquirido tiempo en televisión de manera contraria a lo estipulado en la Constitución. De actualizarse dicho supuesto, esta declaratoria del TEPJF se convertiría en la puerta de entrada para solicitar la nulidad de la elección por adquisición de tiempos.

El problema radicaría en saber si se cumplen las condiciones determinantes para que esto sucediera. Suponiendo que dicho ilícito constitucional se cometiera ya con el proceso electoral en marcha ¿Se podría anular el proceso electoral y no la elección, porque todavía no habría ocurrido la votación? ¿Se continuaría con la etapa de preparación de la elección, sabiendo que ya existe sentencia que acredita la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión?

En términos procesales ¿teniendo la declaratoria –vía sentencia de especial sancionador- se puede solicitar la nulidad del proceso electoral? ¿Se puede anular el proceso electoral? ¿Qué condiciones se necesitan para que la sentencia del procedimiento especial sancionador sea determinante para el juicio de inconformidad?

La ponencia plantea dar un mecanismo de vinculación ante tal escenario, a partir del perfeccionamiento del PES y el JIN.

---

<sup>1</sup> Por Abraham Giovanni Hernández González.

<sup>2</sup> Los cuales son competencia del Consejo General del INE.

<sup>3</sup> El 31 de marzo de 2015, mediante la sentencia del SUP-REP-143/2015 se determinó que una vez que comenzará el proceso electoral todos los procedimientos que se abrirían por incumplimiento serían vía especiales sancionadores.

<sup>4</sup> Se acreditó la compra en los siguientes asuntos: SUP-RAP-234/2009 y SUP-RAP-011/2011.